

ÍNDICE AI: AFR/62/24/96/s

JOHANNESBURGO, 4 DE NOVIEMBRE 1996

AMNISTÍA INTERNACIONAL SOLICITA MEDIDAS EFICACES PARA DETENER LA ENTRADA DE ARMAMENTO A LA REGIÓN AFRICANA DE LOS GRANDES LAGOS

**JOHANNESBURGO** -- Dada la forma en que se han utilizado las armas en la región africana de los Grandes Lagos, Amnistía Internacional solicita a la comunidad internacional que detenga y evite la transferencia de armamento y munición a las fuerzas armadas, las milicias y otros grupos armados de Zaire, Burundi y Ruanda.

«Es una situación explosiva y catastrófica que afecta a innumerables refugiados y civiles de estos países. Todo el mundo reconoce que la zona está repleta de armamento ligero, a pesar de los compromisos contraídos por la comunidad internacional para limitarlo», ha declarado Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional, durante su visita a Sudáfrica.

«El hecho de que se hayan producido muertes en actos de represalia cometidos por todas las partes supone que la llegada de más armas agravará el conflicto y conducirá a nuevas atrocidades.»

La organización ha comunicado que, según los informes, en la zona se ha encontrado armamento procedente de diversos países: Bélgica, China, Chile, Egipto, Francia, Alemania, Israel, Rusa, Rumanía, Sudáfrica, EE. UU. y Yugoslavia.

Zaire, Burundi y Ruanda han seguido recibiendo armas a pesar de los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por sus fuerzas armadas y las milicias vinculadas a ellas, especialmente en las zonas fronterizas. En Ruanda, miembros del Ejército Patriótico Ruandés (EPR) han ejecutado extrajudicialmente en 1996 a varios centenares de civiles desarmados durante operaciones militares contra insurgentes armados. En Burundi, las fuerzas de seguridad y las milicias, mayoritariamente tutsis, continúan masacrando a centenares de civiles hutus desarmados, en algunos casos refugiados que regresan de Zaire. Además, los grupos armados de oposición de Burundi también han perpetrado homicidios arbitrarios de civiles tutsis.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó el año pasado una Comisión Internacional de Investigación para indagar sobre las denuncias de que las antiguas fuerzas armadas y milicias ruandesas en el exilio, muchos de cuyos componentes instigaron crímenes contra la humanidad o participaron en ellos durante 1994, se estaban armando y continuaban entrenándose cerca de los campos de refugiados, a pesar del embargo de armamento de la ONU. No obstante sus limitados recursos y la falta de cooperación de muchos Gobiernos, especialmente el de Zaire, que negó la entrada a sus investigadores, la Comisión ha informado que el envío de armamento y el entrenamiento militar continúan.

«Los recientes informes de homicidios deliberados y arbitrarios y de otros graves abusos cometidos por los soldados zaireños y la oposición armada banyamulenge al este de Zaire son parte de un panorama mucho más amplio de atrocidades cometidas en mayor o menor grado por todas las partes en conflicto a lo largo de la frontera de Zaire con Ruanda y Burundi», ha declarado Pierre Sané.

Amnistía Internacional también solicita al Gobierno de Zaire y a otros Gobiernos de la región de los Grandes Lagos que cooperen plenamente con la ONU y permitan la vigilancia internacional de todos los cargamentos que entren a Burundi, Ruanda y Zaire por tierra, mar y aire para garantizar que ningún envío contiene armas o munición.

«Si estos Gobiernos desean que el mundo crea que sus fuerzas armadas no permiten que las milicias cometan graves abusos ni las ayudan a cometerlos, deben dejar que los investigadores internacionales accedan libremente para demostrar que no es así», ha afirmado Sané.